

JUSTICIA Y CONTROL CONSTITUCIONAL

Dr. Miguel A. Camba Campos
Ex-Magistrado – Vocal Tribunal Constitucional

El tema constituye una de las figuras de mayor debate y polémica, dentro de la esfera del Derecho Constitucional. El propósito fundamental del constitucionalismo moderno, es la limitación del poder del Estado, siendo este mecanismo, la principal garantía de los derechos de las personas y de la sociedad.

La dignidad y la libertad de la persona son inviolables, respetarlos y protegerlos es deber primordial del Estado. Si la democracia es el sostén de las garantías constitucionales, debemos propender a que estas garantías constitucionales se orienten a una justicia integral.

El derecho constitucional, no debe estar sometido indefectiblemente a los límites de la norma escrita que, por esencia, es muy general y breve. Va enriqueciéndose diariamente en el quehacer multiplicador de la administración pública, en la interpretación casuística del administrador, en la doctrina y en los fallos que dictan los jueces de instancia constitucional y el Tribunal Constitucional. Es principio de derecho público, que las sentencias y las resoluciones, convierten al derecho administrativo en brazo ejecutor y las resoluciones, convierten al derecho administrativo en brazo ejecutor de la Carta Fundamental y, en consecuencia, también, complementan a aquella.

Por ello, es menester que el Juez Constitucional, se despoje de la obediencia mítica de la letra escrita, para alcanzar como objetivo la constitucionalidad, recurriendo al conocimiento de la doctrina, y a la interpretación general que contienen los fallos, para alertar y advertir la última consecuencia de la arbitrariedad de la autoridad.

El ciudadano común y los personeros del Estado, ignoran el papel fundamental que desempeña y debe desempeñar los órganos de control constitucional. No hay función pública u órgano del Estado que no esté sujeto a dicho control; de ahí se deduce la importancia de sus resoluciones, pues, no existe mejor juzgador que quienes, enriquecidos por una formación académica, añadan la práctica constante en el manejo de las leyes, creando en unos casos una doctrina constitucional inédita y que abarquen, en otros, una gama completa de las materias de su competencia. Solo así, la democracia dejará de ser un concepto difuso y pasará a convertirse en una realidad concreta.

El crecimiento del Estado ecuatoriano, ha llevado consigo el de la administración pública, y ha creado una serie de condicionamientos, que han influido directamente en la formación de su sistema democrático. Por lo mismo, la justicia constitucional ha incidido directamente en su consolidación, al haber sido estructurado en los textos constitucionales, como una instancia de

decisión, sobre los derechos y garantías establecidos por la Carta Política, a favor de los particulares. Nuestra justicia constitucional, cuenta indiscutiblemente con una normatividad avanzada, sustentada en los principios más importantes del Derecho Administrativo contemporáneo. Mas, está debilitada en la parte procesal, que debe ajustarla el Legislador, para adecuar las normas legales de la Ley de Control Constitucional actualmente en vigencia, a la realidad surgida como producto de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, cuya Codificación fue aprobada el 5 de junio de 1998, y que contiene reformas y textos no reformados, de la Constitución de la República Codificada el 13 de febrero de 1997.

Es entonces imperiosa la necesidad de disponer de un Código de Derecho Constitucional o de Derecho Administrativo, que determine los procedimientos de la Administración, tanto más que, la dispersión y diversidad, produce verdaderos problemas para sustanciar las acciones que impugnan los actos, como resultado de la falta de coherencia y secuencia, afectando al ordenamiento, para garantizar la plena vigencia de la legalidad y por consecuencia de los derechos constitucionales.

EL JUEZ CONSTITUCIONAL EN ECUADOR COMO INTÉRPRETE OFICIAL Y SUPREMO DE LA CONSTITUCIÓN

En el Ecuador, el control constitucional aparece en la Constitución de 1851, a través del denominado Consejo de Estado, conjuntamente con el control de legalidad. En 1869, se encargó a la Corte Suprema de Justicia, el control previo de las leyes objetadas por la Función Ejecutiva como inconstitucionales. A las Constituciones de 1906 y 1929, les correspondió mantener este esquema de control efectuado por el Consejo de Estado, hasta que en 1945, siguiendo el modelo español de 1931 –influencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la República Española–, se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, que sólo podía suspender los efectos de una ley, hasta que el Congreso dictamine y, en cuanto a la inconstitucionalidad o ilegalidad de otras normas, que no tuvieran el carácter de ley, el Tribunal podía formular observaciones, es decir en última instancia, el control estaba asignado a la Función Legislativa.

La Constitución de 1945 fue abrogada por la de 1946, la misma que restituyó por última vez al Consejo de Estado. El Tribunal de Garantías Constitucionales, se reincorpora en la Constitución de 1967, y se mantiene en la Constitución de 1979. Su principal deficiencia fue la de no tener decisión definitiva, pues sus resoluciones debían someterse al Congreso Nacional; en virtud de las reformas de 1992, las decisiones del Tribunal de Garantías Constitucionales, se sometían a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dando lugar a un sistema de control híbrido.

El actual Tribunal Constitucional del Ecuador, surge con las reformas promulgadas en enero de 1996, y sus resoluciones son de última y definitiva instancia. De estas importantes reformas constitucionales, nacieron las nuevas instituciones que garantizan los derechos de las personas: el Amparo Constitucional, el Hábeas Data y la Defensoría del Pueblo.

En lo relativo al Tribunal Constitucional, lo más destacable de las reformas, fue otorgarle capacidad de decidir de modo definitivo, las cuestiones sometidas a su competencia, esto es conocer y resolver demandas de inconstitucionalidad que, por el fondo y la forma, se presenten contra actos normativos, susceptibles de impugnación como son, leyes orgánicas y ordinarias, decretos leyes, ordenanzas, estatutos, reglamentos y resoluciones, emitidos por órgano investido de poder público; actos administrativos de autoridad pública, que no tienen carácter normativo; resolver objeciones de inconstitucionalidad que haya hecho el Presidente de la República, en el proceso de formación de leyes; dirimir conflictos de competencia o de atribuciones, asignadas por la Constitución o pugna de poderes; conocer de las resoluciones, que denieguen las peticiones de hábeas corpus y hábeas data, mediante impugnación por recurso de apelación que debe formularlo el actor. En el caso de la acción de amparo constitucional, tanto su concesión como su negativa, pueden ser objeto de apelación ante el Tribunal Constitucional.

Cabe puntualizar que las reformas de la Asamblea Nacional Constituyente, fueron limitadas en cuanto al Tribunal Constitucional, así, es cuestionable que la Asamblea, no haya comprendido algunos aspectos de la justicia constitucional, tales como que al resolver la inconstitucionalidad de una norma, este órgano debe estar llamado a interpretar de modo obligatorio, con mayor autoridad jurídica que el propio Congreso Nacional. Al contrario de lo que sucede en la mayoría de las legislaciones constitucionales, en especial en los sistemas europeos, el Tribunal Constitucional de Ecuador, no está facultado para interpretar de modo obligatorio la Ley Fundamental.

Así las cosas, interesa analizar el estatuto de las personas que desempeñan el cargo de Juez Constitucional, por su relevancia para el desarrollo de la Justicia Constitucional en el continente. Por esta razón, la **problemática** reside en el siguiente planteamiento: El fundamento del Estado de Derecho radica en el principio de legalidad, en el sometimiento del ejercicio del poder, de las autoridades, de los órganos del gobierno y de los ciudadanos **a reglas de derecho**, a una estructura normativa constitucional, a una Ley Fundamental, la Constitución, que contiene las normas fundamentales, que amparan los derechos y libertades, organiza el Estado y las instituciones democráticas, e impulsan el desarrollo económico y social, por consecuencia, regula las relaciones entre administrados y gobernantes, y establece los derechos y garantías de las personas. El Titular del derecho inobservado debe hacer valer el mismo, para ir formando una **conciencia jurídica predominante en los Estados de Derecho**.

En este orden de ideas, es evidente que el Tribunal Constitucional dentro de las resoluciones que emite, procede con responsabilidad jurídica y no política; sus fallos contienen un profundo análisis objetivo de las pruebas, para lograr una justa resolución. No olvidemos que la Constitución no es un cuerpo normativo rígido. La Constitución debe interpretarse de la manera más variable. Una ley de categoría inferior, puede interpretarse de la manera más rígida, pero la Constitución jamás. El fundamento para así proceder radica, indiscutiblemente, en que ésta – como dicen los tratadistas– va “acomodándose al devenir, a las épocas, las ideologías; y de ahí que tiene una función transformadora del Estado”.

El Estado Ecuatoriano es un Estado de Derecho, entendido como aquel en que se produce la plena subordinación del Estado al derecho. El estado está subordinado a la Constitución y a la ley; es decir, aquel en que el administrador y en general toda la comunidad, debe sujetarse a la

norma; lo contrario, es una arbitrariedad. En él, se exige también que se obedezca el principio de legalidad o el imperio de la ley, de manera que el propio Estado reconozca, que toda ley tiene una jerarquía que debe respetarse, lo cual implica también reconocer, que existe un principio de jerarquía normativa, en virtud del cual la Constitución está en la cúspide, y que las leyes, los decretos ejecutivos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos ministeriales y otros actos administrativos o legislativos, son de menor jerarquía, de forma tal que el respeto al principio del Estado de derecho, de la legalidad, significa respetar el principio de la jerarquía normativa, que va concomitante con el principio de seguridad jurídica. El principio de la supremacía de la Constitución, aquel que señala que la Constitución es la Ley Suprema de la República, es el que posibilita el control constitucional.

Entonces, cual es el rol que juega el Juez Constitucional, como intérprete oficial y supremo de la Constitución?. La justicia constitucional, es “La autoconciencia que la Constitución tiene de su propia eficacia y dinamismo, de su propia jerarquía y poder”. Por lo mismo, la Constitución tiene que cumplirse, ejecutarse, observarse, respetarse y tiene que haber un control constitucional, que cubra la totalidad del Estado. Ninguna de las funciones del Estado, puede estar fuera del control constitucional, porque, además de que es la autoconciencia de la jerarquía y del poder que tiene la Constitución, es medio idóneo para hacer efectivo el derecho.

El control constitucional, obviamente, tiene sus detractores. Se explican las corrientes de defensa y de crítica, porque una Constitución puede ser teóricamente perfecta, pero que en la práctica no tenga una aplicación debida. Unos, sostienen que quienes ejercen la justicia constitucional no son elegidos, sino que representan una élite, un poder oligárquico, que no puede ejercer un control a las demás funciones del Estado. Otros, consideran que mejorando la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional mediante elección directa, se establecerá un equilibrio en la división del poder, que sobre la base de un control, limite sus actuaciones única y exclusivamente, a aquello que amparan la Constitución y la ley. **Por estas razones el control constitucional es necesario, y tiene fundamento la presencia del Juez Constitucional.** El control constitucional definitivamente, tendrá que imponerse como una solución imperativa, a los problemas de inconstitucionalidad permanente, en que incurren las tres funciones del Estado ecuatoriano. Las últimas reformas constitucionales, crearon la Función de Control, que no sólo la ejerce evidentemente el Tribunal Constitucional, sino también la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y las Superintendencias de Bancos, de Compañías y de Telecomunicaciones.

La justicia Constitucional trata los problemas políticos con criterios jurídicos, poniendo la razón del Derecho, donde los órganos políticos ponen solo pasión, y garantizando la libertad de las minorías frente al abuso de las mayorías”, dice el profesor García de Enterría. En ello no se equivoca el Tratadista Español. En Ecuador, el Tribunal Constitucional tramita, conoce e interpreta las normas de manera jurídica y ello es innegable. En el procedimiento son formales sus actuaciones procesales, y dicta resoluciones que por mandato constitucional y legal, son motivadas y está conformado por magistrados de innegable idoneidad moral.

En definitiva, insisto, si el Tribunal Constitucional es el encargado de aplicar –y con ello de interpretar– casuística y diariamente la Constitución con resoluciones obligatorias en Ecuador,

para mejorar el rostro del Juez o Tribunal Constitucional –como intérprete oficial y supremo de la Constitución–, debe eliminarse del Congreso Nacional, la interpretación general-mente obligatoria de la Carta Suprema y de las leyes, pues éste es un organismo esencialmente político y aquél esencialmente jurídico, por lo que debe ser el único intérprete de la Constitución, que permita crear una doctrina obligatoria para todos, excepto para sí mismo. En este sentido, me pregunto si la Constitución debería contener normas respecto de la interpretación constitucional, con el mayor respeto, considero que NO. El Tribunal Constitucional, que puede suspender normas de la Carta Fundamental consideradas inconstitucionales, debe también interpretar las disposiciones de la Constitución de la República de manera generalmente obligatoria.

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL EN EL ECUADOR

El Ecuador es un país de renovada experiencia constitucional, pese a que impera el rasgo común de otros países latinoamericanos, esto es de mantener el perfil de ciertas instituciones, al reiterativo cambio de textos. Lo enunciado, se encuentra en el complejo sistema de interpretación constitucional que empieza en 1835, se perfecciona en 1906 y se mantiene hasta la presente fecha, con una especial distribución de competencia, entre los órganos encargados de velar por la supremacía de la Constitución.

El sistema de interpretación constitucional en el Ecuador, puede resumirse de la siguiente manera:

- a.-** Es facultad privativa del Congreso Nacional, interpretar la Constitución por medio de ley, y con carácter generalmente obligatorio (artículo 284);
- b.-** Es facultad privativa del Tribunal Constitucional, pronunciarse en forma generalmente obligatoria, sobre la inconstitucionalidad de la ley (inciso segundo del artículo 274);
- c.-** Durante la tramitación de un proyecto de ley, y una vez que el mismo es notificado para su promulgación, el Presidente de la República puede objetarlo por inconstitucional. La objeción se remite al Tribunal Constitucional para su previo examen, y es sometida al Congreso Nacional. Este no puede insistir en el proyecto, si el Tribunal Constitucional ha estimado inconstitucional el mismo, (artículo 154);
- d.-** El Tribunal Constitucional puede suspender total o parcialmente, en cualquier tiempo y a petición de parte –Presidente de la República, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, mil ciudadanos en goce de derechos políticos, o cualquier persona previo informe favorable del Defensor del Pueblo sobre su procedencia–, los efectos de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, ordenanzas, estatutos, reglamentos y resoluciones emitidos por órganos de las instituciones del Estado, que fuere inconstitucional por vicio de fondo o de forma (artículos 276 numeral 1 y 277 numerales 1, 2 y 3);

- e.- Cualquier juez o tribunal puede declarar inaplicable, de oficio o a petición de parte, en los casos particulares que conozcan, cualquier precepto legal contrario a la Constitución, o de los tratados o convenios internacionales. (artículo 274 inciso primero); y,
- f.- El Defensor del Pueblo está facultado para excitar la violación o inobservancia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, luego de escuchar a la autoridad u organismo responsable. (artículo 96);

El sistema de interpretación constitucional en Ecuador, obliga a las autoridades administrativas a aplicar las normas de la Constitución que sean pertinentes, aunque la parte interesada no las invoque expresamente. (artículo 273).

Lo reseñado anteriormente, que evidencia que solo el Congreso Nacional tiene facultad de interpretar la Constitución, de un modo generalmente obligatorio, y de resolver las dudas, relativas a la inteligencia de alguno o algunos de sus preceptos o declaraciones (artículo 284), no obsta para que otros poderes del Estado, puedan también interpretarlas respecto de las cuestiones concretas que les fueren sometidas, puesto que la interpretación del Congreso, produce el resultado de ser generalmente obligatoria, y se ejercita en forma de ley que debe ser acatada por todos y en todos los casos, en tanto que la interpretación de otros Poderes del Estado, se limita al punto o temática particular materia de la resolución, y es obligatoria solamente en el asunto que la ha motivado.

Es indiscutible que en materia de interpretación constitucional existe una especie de candado, pues en forma irrestricta esta facultad es del Congreso Nacional, si bien el Tribunal Constitucional suspende la aplicación de actos normativos, y la Defensoría del Pueblo excita y observa actos de autoridad pública por contrariar la Constitución, en último término y por facultad expresa y de manera obligatoria, es el Congreso quien interpreta las dudas de orden constitucional, lo que equivale a decir que la Constitución es lo que el Congreso Nacional decide. Las atribuciones entregadas a los jueces y tribunales ordinarios de la Función Judicial, y especiales como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, para fijar el sentido y alcance de la normatividad constitucional –sin perjuicio de los casos juzgados con criterio eminentemente técnico–, dependerán siempre de lo que al final y de manera obligatoria, la mayoría del Congreso Nacional decida. Pero debe quedar claro, que lo relatado es en la temática de interpretación del texto constitucional con carácter general y obligatorio, porque el Tribunal Constitucional por expresa facultad constitucional, reitero, considera o no ajustada a la Constitución una ley, decreto o norma jurídica cualquiera sea su naturaleza. Cabe añadir también que en el caso de proyectos de ley, la decisión del Tribunal Constitucional recabado por el Presidente de la República –contrario al proyecto por ser totalmente inconstitucional, prima sobre la voluntad del Congreso Nacional, debiendo éste archivar la iniciativa.

Desde el punto de vista de la hermenéutica constitucional, lo relatado constituye consagrar un sistema de interpretación general y obligatorio, en que predomina el criterio político, entendido en su sentido clásico – sobre el jurídico, lo que no ocurre en los casos concretos, cuya interpretación consagra un sistema de distribución de competencias, cuya cúspide la tiene el Tribunal Constitucional.

Entendida así la temática, la interpretación con carácter general y obligatorio del texto constitucional, responderá a los requerimientos de adaptación de su normativa a la problemática, y demás circunstancias de actualidad del intérprete. Este panorama de la justicia constitucional de Ecuador, permitió a un ilustre Tratadista Chileno, Jorge Tapia Valdés afirmar que “En Ecuador existe, o se da la posibilidad de que exista, un criterio interpretativo de carácter progresivo, actualizador, que da cabida incluso a la construcción constitucional. El sistema conduce, en forma natural a interpretar la Constitución, no en la forma pensada por el Constituyente, por mucho que se quiera simplemente proyectar su perspectiva al tiempo presente, sino de aquel modo que más conveniente resulte a los requerimientos actuales del gobierno del país; a sabiendas que el Profesor de Derecho Constitucional Chileno, analizó el tema, cuando en Ecuador las resoluciones se sometían a decisión final del Congreso Nacional, es decir cuando funcionaba el suprimido Tribunal de Garantías Constitucionales.

Sin embargo, debemos reconocer que el Tribunal Constitucional con extremada preocupación, viene creando doctrina o jurisprudencia, en lo que concierne a la suspensión o inaplicabilidad de textos normativos, con criterios o posiciones generales frente al tema.

La doctrina ecuatoriana, respecto de la hermenéutica constitucional tiene un referente obligado, el constitucionalista Ramiro Borja y Borja, que en su Obra “Derecho Constitucional Ecuatoriano” señala: “Para que la interpretación de las normas jurídicas sea lo más acertado posible, para que, al aplicarlas, se realice del mejor modo posible la justicia, es necesario considerar cuáles son los intereses que protegen, cuáles son los bienes jurídicos, para considerando el fondo y la forma del Derecho Positivo, evitar el vicio del formalismo, en que se pierde de vista el fin del Derecho. Fin que tiene su manifestación en cada una de las normas, en los bienes jurídicos, que son los “intereses jurídicamente protegidos”, lo que lleva a concluir, siguiendo la escuela de Kelsen, que interpretar una norma es desenvolver o declarar su contenido “de modo que deducir de una norma otra es interpretar la primera”. Al respecto, el mismo autor –que fue miembro de la Comisión Legislativa Permanente y de Codificación del Congreso Nacional en épocas pasadas, expresó que la tarea codificadora supone un esfuerzo esencialmente interpretativo y han de usarse, los cuatro elementos tradicionales de la hermenéutica, como son los métodos gramatical, lógico, histórico y sistemático, cuando afirma: “El Derecho Positivo, que es un deber ser respecto a la realidad al cual rige, es un hecho ante la doctrina jurídica. El codificador, al aplicar los principios de la ciencia jurídica a los elementos del Derecho Positivo, que tiene que reunir y combinar, considera a las normas de este Derecho como hechos. El conocimiento de éstos, se vincula estrechamente con el estudio de la historia”. Así pues, la interpretación del derecho, cuando es aplicado, se hace considerando los valores protegidos y buscados, recurriendo a todos los elementos interpretativos, para determinar el sentido de la norma.

EL CRITERIO INTERPRETATIVO EN MATERIA CONSTITUCIONAL

Existe doctrinariamente una variedad de escuelas interpretativas, cada una de las cuales, ciertamente, aporta con sus puntos de vista para la gestión hermenéutica, y sirven para el fin de ejecutar una interpretación jurídicamente correcta y justa.

Con este prolegómeno, es obvio reconocer que los métodos tradicionales conocidos: gramatical, lógico, histórico y sistemático, no se contra-ponen ni están jerarquizados. Sin embargo, se debe reconocer que el intérprete trata de reducirlos a dos, gramatical y lógico, aplicados de forma simultánea para encontrar el sentido del texto constitucional.

Por los resultados de los criterios de interpretación, estos son declarativos, restrictivos y extensivos, pero existen conceptos opuestos, que hablan de la interpretación actualizadora y de construcción jurídica.

Analicemos, brevemente, cada uno de ellos, de forma tal que nos permita por sistematización, esbozar los criterios que el Tribunal Constitucional Ecuatoriano, ha aplicado en sus diferentes competencias:

Es **declarativa**, la interpretación que se limita a confirmar en el caso concreto, las palabras de la norma, haciendo perfectamente aplicable aquellas situaciones, que aparecen como naturalmente comprendidas.

Es **restrictiva**, cuando se limita el alcance de la norma, dejando fuera de aplicación, aquellas situaciones que podrían considerarse comprendidas en ella, es decir, se restringe el alcance de las palabras que utiliza la ley.

Es **extensiva**, cuando amplía el sentido natural de las palabras de la ley, es decir, cuando el texto expresa menos de lo que la norma contiene, o lo que el legislador pretendió.

Estos métodos, no se contraponen en absoluto al propósito de adaptar la ley a situaciones actuales, distintas a las del legislador previo o no pudo prever.

Pero lo más importante en la temática de la interpretación es, sin duda alguna, defender el **valor jurídico esencial** de la existencia misma del derecho, cual es la **seguridad jurídica**. Jorge Tapia Valdés, señala que sigue siendo la seguridad jurídica, el máspreciado valor para el Derecho. “El significado de la seguridad jurídica –dice– se ha referido tradicionalmente a dos aspectos: la conservación de los derechos sustantivos, y la certeza de que no habrá variación en el status jurídico, sino a través de los mecanismos, autoridades y procedimientos que el propio derecho prevé, con estructura jerarquizada. Tengamos presente, además, que no puede pretenderse la existencia de una seguridad jurídica en términos absolutos, porque ello equivaldría tanto como petrificar el derecho y, por consiguiente, a negar toda seguridad para las instancias futuras”.

En la interpretación constitucional es de justicia reconocer, que los problemas son en extremo más amplios que los de la interpretación común, pues repercuten en el ordenamiento jurídico, y porque son menos comunes o habituales, si consideramos la premisa de que todo acto legislativo o gubernativo, por lo general se encuadran en el texto constitucional y en aplicación de la

presunción de legitimidad y ejecutoriedad de que gozan todos los actos administrativos, mientras no se demuestre lo contrario.

En consecuencia, debe ser ponderada, adecuada, documentada y objetiva la labor del juez constitucional, para interpretar en forma correcta y justa la Constitución, dado que su declaración tiene repercusión general, y afecta a toda una gama de valores jurídicos, y conciernen al legislador, al juez, al empleado público y al abogado.

El Legislador es quien de manera cotidiana se enfrenta al problema de interpretación, pues al dictar las leyes complementarias de la Constitución y las comunes, debe sujetar su actuación a procedimientos estrictos, para cuidar el sentido del precepto fundamental.

En materia de interpretación constitucional, es lícito al juzgador constitucional, recurrir al método interpretativo que parezca más apropiado, para establecer una decisión justa y correcta. Como lo señala la doctrina e igualmente ha expresado el Tribunal Constitucional de Ecuador, cierta-mente, la defensa de la integridad y supremacía de la Constitución, no se logra con una interpretación literal, estrecha y restringida de los textos constitucionales, pues esa actitud será siempre contraria al espíritu del Constituyente, desprovisto de sentido de actualidad que frena el desarrollo institucional y socioeconómico de países comprometidos con la supremacía de la Constitución.

El Tribunal Constitucional de Ecuador ha reiterado en sus fallos, que no cabe realizar una interpretación literal de los postulados de la Constitución, sino que deben aplicarse criterios de interpretación constitucional, hoy por hoy universalmente aceptados, que se fundamentan principalmente en la funcionalidad de la norma constitucional y en la unidad de la Constitución.

El criterio de interpretación constitucional, sobre la funcionalidad de la norma parte –ha señalado– del entendimiento, de que ésta no es simplemente un artículo sino un concepto, y solamente la plena comprensión de su finalidad, nos permite interpretarla sin violar lo que ha querido establecer la voluntad soberana.

El criterio de interpretación sobre la unidad de la Constitución, nos permite mirar el alcance, no de un único artículo, sino de toda la norma fundamental, de forma tal que todas las instituciones, deben comprenderse de manera que guarden armonía entre sí; y la Constitución Ecuatoriana, deja en claro que su vigencia y validez, deviene primordialmente de que las normas constitucionales, van a amparar los derechos y libertades, a organizar el Estado y sus instituciones de carácter democrático, y a impulsar el desarrollo económico y social.

Actualmente, en la Comisión Especializada Permanente de lo Civil y Penal del H. Congreso Nacional, se encuentra para el trámite constitucional y legal correspondiente, el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, que se fundamenta en la necesidad de armonizar la Ley de Control Constitucional, con las disposiciones de la Constitución de la República, relativas justamente a la supremacía constitucional, al control, justicia y garantías constitucionales, tendente a asegurar una adecuada aplicación del derecho Constitucional, y a la afectiva vigencia de los derechos humanos y garantías fundamentales, particulares que exigen,

sin mayor esfuerzo, derogar la vigente ley de Control Constitucional, publicada en el Registro Oficial No. 99, de 2 de julio de 1997 y promulgar una nueva, tomando como antecedente, en lo positivo, el proyecto del Tribunal Constitucional y en lo demás, incorporar las modificaciones necesarias a la propuesta original, como la que es materia de esta aportación; la de dar mayor trascendencia, respecto a la aplicación de la justicia constitucional, como es la creación de los Tribunales Constitucionales con Jerarquía de Corte Superior, y la designación de los mismos para la instancia que deberá ser asignada al Tribunal Constitucional, para evitar otorgar al Consejo Nacional de la Judicatura atribuciones transitorias a ese propósito.

Finalmente, importante será adoptar decisión respecto a la suerte del Registro Oficial, que en mi modesta opinión debe funcionar como una entidad adscrita al Tribunal Constitucional.